

LA XVII CONFERENCIA DE LA COMMONWEALTH

La XVII Conferencia de la Commonwealth, reunida en Londres durante diez días del mes de enero, ha resultado, tal como se esperaba, un absoluto fracaso al no haber podido resolver ninguno de los problemas fundamentales que le correspondía examinar. Los representantes—24 jefes de Estado y de Gobierno, 13 ministros de Asuntos Exteriores y otros 32 ministros diferentes—de los 28 países que integran esta Organización se han entregado a estériles debates plenos de bizantinismos. El rotativo *The Times*, en consecuencia, establecía el siguiente resumen: «La Conferencia ha discutido casi todo y no ha arreglado prácticamente nada... Llegaron, hablaron y escucharon. Poco más puede decirse de la Conferencia de la Commonwealth.» Cabe preguntarse si ante semejante inoperancia volverá Marlborough House a acoger nuevamente a los representantes de la Commonwealth, en la que, como subrayaba el *Daily Telegraph*, «la gran mayoría se alinea automáticamente contra la Gran Bretaña».

Esta es la opinión unánimemente compartida, la de que a partir de ahora se alza una grave interrogante sobre el porvenir de la Mancomunidad. Raymond Lacoste publicaba en *La Libre Belgique* un amplio artículo titulado «La Commonwealth se desvanece», y ese título parece reflejar bastante aproximadamente la situación resultante tras de esta XVII Conferencia.

No obstante, ¿cabía esperar algo diferente? Es muy dudoso, puesto que la Comunidad, pese a la flexibilidad de sus vínculos, ha quedado fosilizada y carece de objetivos susceptibles de mantener la adhesión entusiasta y de adecuarse a las nuevas corrientes que circulan en el ámbito internacional. «La Commonwealth me parece un anacronismo», exclamaba el primer ministro canadiense, Trudeau, aunque agregase a renglón seguido que «es un anacronismo que tiene su utilidad en la medida en que permite encontrarse

a varios jefes de Estado». Si ésta es la única, harto menguada, utilidad que proporciona la Organización, puede extenderse sin quebranto alguno el acta de defunción, puesto que existen otros organismos más idóneos y amplios que cubren idéntica misión, como sucede con las Naciones Unidas, por ejemplo. Por ello, nos parece más razonable y ajustado a la realidad el juicio expresado por la primer ministro de la India, Indira Gandhi, cuando afirmaba, días antes de la Conferencia, que «las instituciones dejan de existir cuando no ayudan a sus miembros». El *Sunday Express* recordaba que la señora Indira Gandhi había declarado recientemente que la India pertenecería a la Commonwealth todo el tiempo en que le resulte interesante y mientras pueda conseguir algo de ella. «La verdad es—concluía el semanario—que muchos de los países que concurren a Londres no sienten la menor lealtad ni al Reino Unido ni a la Commonwealth», y terminaba afirmando que «la señora Gandhi, lo mismo que el doctor Kaunda y varios más, vienen no a ayudarnos, sino a crearnos problemas pidiéndonos que declaremos la guerra a Rhodesia». La esencia misma de la Organización está sometida a debate.

Bastaría examinar la multiforme composición—diversidad de razas y Continentes, con todo lo que esto comporta de diversidad de problemas y aspiraciones—para poder deducir sumariamente la suma dificultad, práctica imposibilidad más bien, de hallar un denominador común a sus funciones. Actualmente en la Commonwealth, además del Reino Unido, se hallan como países miembros—en orden decreciente de antigüedad—los siguientes: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, Pakistán, Ceilán, Ghana, Nigeria, Chipre, Sierra Leona, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uganda, Kenya, Federación de Malasia, Tanzania, Malawi, Malta, Zambia, Gambia, Singapur, Guyana, Botswana, Lesotho, Barbados, Mauricio y Swaziland. La población total de estos países sobrepasa los ochocientos millones de habitantes y ocupan una superficie de casi 27 millones de kilómetros cuadrados. Por áreas continentales, la absoluta mayoría corresponde a Africa, con 13 países, siguiendo Asia, con seis; América, con cinco, y Europa y Oceanía, con dos cada una. Los países miembros son absolutamente libres de determinar su propia política interna y exterior y responsables de sus obligaciones internacionales, merced a lo cual se registran trayectorias totalmente antagónicas en las políticas mantenidas por sus miembros.

Así resulta que las desavenencias, querellas y hostilidades que mantienen entre sí los países de la Commonwealth son tan numerosas y adquieren tal

relieve, que las sucesivas Conferencias se limitan a examinar asuntos de trámite para evitar choques violentos que pongan en peligro la supervivencia del conjunto. Así, tenemos en una ojeada sumaria el permanente enfrentamiento bélico existente entre dos miembros asiáticos—la India y el Pakistán—desde la fundación de ambos Estados; el recelo y disgusto de Nigeria contra otros dos miembros africanos—Tanzania y Zambia—que han reconocido a Biafra; el claro resentimiento de Malasia y Singapur hacia el Reino Unido por llevar adelante sus planes de retirada británica «al este de Suez» en 1971; la enemistad de Zambia y Tanzania con Malawi por la actitud de este Estado respecto a los problemas de Rhodesia y República Sudafricana; la indignación de Chipre por el mantenimiento de las bases británicas en su territorio, etc.

Es obvio que en un cónclave tan numeroso y disperso, el Reino Unido ha perdido el control absoluto que poseía en 1917, cuando se fundara la Commonwealth y ésta—formada por la Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Africa del Sur y Terranova—poseía la coherencia derivada de una serie de factores comunes tales como la raza y la Corona. Esta identificación se ha perdido y actualmente muchos de los países miembros de la Mancomunidad votan en la Organización de las Naciones Unidas contra el Reino Unido, aun en cuestiones que éste considera de interés capital. Por ejemplo, durante el último debate de la IV Comisión de la O. N. U. sobre la descolonización de Gibraltar (16 diciembre 1968) votaron en favor de la resolución, y por ello en contra de la tesis defendida por Londres, tres países de la Commonwealth (Chipre, Tanzania y Zambia), se abstuvieron otros seis (Ghana, India, Kenya, Pakistán, Trinidad y Tobago y Uganda) y se hallaron ausentes durante la votación tres más (Malta, Nigeria y Swaziland). Es decir, que en este asunto concreto doce de los 28 países pertenecientes a la Mancomunidad no apoyaron de una forma u otra la posición del Reino Unido. En la votación sobre el mismo asunto celebrada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 18 de diciembre, a pesar de las insistentes presiones británicas, se volvieron a registrar las siguientes defecciones: Chipre, Pakistán, Tanzania y Zambia, que votaron a favor de la descolonización de Gibraltar; Ceilán, Ghana, India, Kenya, Nigeria, Swaziland, Trinidad y Tobago y Uganda, que se abstuvieron, y Gambia y Malta, que se hallaban ausentes. Es decir, 14 naciones—la mitad de los países miembros de la Commonwealth—no ayudaron al Reino Unido en esta cuestión. Ciertamente que las pretensiones

de Londres en el asunto de Gibraltar sobrepasan los límites razonables y no era de esperar que todos los Estados se plegaran a votar en favor de tan manifiesta injusticia. Pero no es menos cierto que en otros debates en que no se dan estas características tan elementales y evidentes de justicia se registran igualmente estas fuertes discrepancias entre el Reino Unido y aquellos países miembros en los cuales en el pasado ejerciera su dominio imperial. Así el *Sunday Express*, en un comentario, declaraba que «cuando los miembros de la Commonwealth tienen oportunidad de actuar con libertad, como en el caso de Gibraltar planteado en las Naciones Unidas, votan en contra en número de doce o se abstienen». Esta falta de solidaridad, tal como interpreta Londres la aludida actuación, ha sido exhaustivamente aprovechada por Harold Wilson, sacándola en reiteradas oportunidades a colación para defenderse de las acusaciones lanzadas en la Conferencia contra la Gran Bretaña por su deserción de otros compromisos u obligaciones.

Cuando, el 7 de enero, se inauguraba—bajo la presidencia de la reina Isabel II, que interrumpía sus vacaciones para asistir a este acto—en Marlborough House la XVII Conferencia, en su tarea se alzaban tres temas de importancia trascendental: la inmigración de color a la Gran Bretaña, Rhodesia y Nigeria.

El tema sobre la política británica de inmigración ha sido el primeramente abordado. Wilson procedió con suma habilidad porque, previendo las dificultades que iban a presentarse en el examen de la espinosa cuestión rhodesiana, lo hizo preceder por este debate sobre la inmigración, esperando, como así ocurrió, que se produjeran fricciones y fisuras entre los países africanos y asiáticos y quedaran más tranquilos para abordar con moderación el tema rhodesiano. Realmente, la ostentosa solidaridad que exhiben asiáticos y africanos en los comicios internacionales no basta a encubrir la realidad del mutuo recelo con que se relacionan en los asuntos que les afectan. Así, últimamente, el Gobierno del depuesto Cheddy Jagan, en Guyana, tenía, entre otros fines, establecer una supremacía india sobre los habitantes negros, que estuvieron totalmente sometidos durante su prolongado mandato. En Zanzíbar, al filo de la independencia, los habitantes negros procedieron a un feroz exterminio de los árabes, que habían sido sus seculares dominadores. Estos dos ejemplos, entresacados entre otros muchos, demuestran que la solidaridad y «hermandad» afroasiática es puramente ficticia, teórica a lo

sumo, y solamente es efectiva cuando se tratan temas remotos o cuando interviene alguna potencia «imperialista».

Concretamente en el asunto de las leyes de inmigración británicas el origen de la cuestión se halla en el momento en que las autoridades de Kenya iniciaron una campaña de medidas para dificultar la permanencia en su territorio de los residentes de origen indio o pakistaní. A primeros de 1968, el Gobierno de Nairobi ponía en vigor importantes medidas destinadas a restringir las actividades de todos los asiáticos residentes en Kenya que no poseían esta nacionalidad africana. Entonces se contaban allí unos 190.000 asiáticos, principalmente indios y pakistaníes, a los cuales, en virtud de la legislación que proporcionó al país la independencia en 1963, se les dio la oportunidad de elegir entre la ciudadanía de Kenya o retener la del Reino Unido. Fueron 120.000 los que escogieron esta última solución, mientras que los 70.000 restantes pasaban a transformarse en ciudadanos kenyanos. Ante las dificultades económicas que existen en Kenya se inició una fuerte campaña de inspiración gubernamental que reclamaba la expulsión de los asiáticos que poseían pasaporte británico, al objeto de dejar puestos de trabajo disponibles para ocupar por africanos en paro. La radio oficial llegó a decir que «los asiáticos explotan en su provecho la economía nacional», y el poderoso Sindicato de empleados de comercio difundía una nota afirmando que «los asiáticos no tienen ningún derecho a vivir en Kenya, pues nuestro pueblo no es responsable de las dificultades que encuentran en su propio país». Es evidente, por tanto, aparte de la cuestión de la nacionalidad, que todo procede de la animosidad que las dos comunidades, asiática y africana, mantienen desde antiguo y que en el pasado había dado origen a frecuentes choques y no escasos actos de vandalismo. Al entrar en vigor las leyes de Kenya, que prohibían las actividades comerciales a los asiáticos con pasaporte británico, éstos comenzaron a trasladarse en grandes masas al Reino Unido, suscitando la alarma de sus gobernantes, que determinaron, para evitar que el país quedara sumergido por esta marea de color, promulgar una legislación que cortase la entrada de estos inmigrantes sin considerar el pasaporte que exhiben, fijando una cuota anual de sólo 1.500 inmigrantes de color.

El espectáculo curioso que se ha presenciado en esta XVII Conferencia ha consistido en el unánime reproche de los países asistentes—más duro por parte de Pakistán y Jamaica—a la Gran Bretaña por haber prohibido esta inmigración. Decimos curioso porque, en estricta objetividad, las acusaciones

debían haberse dirigido al país promotor del asunto, Kenya, que tan drásticas medidas raciales aplicaba. Esto trae, una vez más, sobre el tapete la cuestión de la insolidaridad de los miembros de la Commonwealth porque uno de ellos, Kenya, no duda en someter a individuos procedentes de otros dos países miembros—India y Pakistán—a un trato tan severo. Y a mayor abundamiento, en el momento en que esos asiáticos eran compelidos a abandonar Kenya, la India, uno de los países de donde son oriundos, establecía claramente que negaba la entrada en su territorio a los indios expulsados de Kenya. Si la propia nación de donde son originarios—y a la que se hallan, por encima de las formalidades de un pasaporte, ligados por vínculos de raza, lengua y religión—rehusa acogerlos, ¿es sorprendente que la Gran Bretaña, país con el que no tienen tan íntimas afinidades, ponga impedimentos a que se establezcan en él? Pero el hecho paradójico es que la gran acusada en este debate ha sido, precisamente, la Gran Bretaña. El presidente de Uganda, Milton Obote, declaraba en una conferencia de Prensa en Marlborough House: «El acta de emigrantes de la Commonwealth es puramente racista. El Gobierno británico no solamente ha devaluado los pasaportes, sino que ha demolido las leyes básicas de la ciudadanía británica. Hay ahora dos clases de ciudadanos británicos, los blancos y los de color. El británico blanco puede volver siempre a su país, se encuentre donde se encuentre; el de color, no.»

Profundizando en el examen de este asunto se descubren perfiles muy significativos. Todos los países asistentes a la Conferencia, casi sin excepción, vienen lanzando anatema sobre Rhodesia, amén de la República Sudafricana, por mantener una política «racista». Pero ¿acaso no es igualmente racista la política de Kenya, que desea que sólo los africanos puedan vivir e influir en el país? Se objetará que las medidas se referían a los asiáticos con pasaporte británico; pero si tal fue ciertamente el principio del asunto, posteriormente las autoridades de Nairobi han declarado francamente que los asiáticos residentes en Kenya, aunque posean la nacionalidad kenyana, «tendrán dificultades para conseguir licencias del Gobierno para montar comercios o industrias». Es decir, la ofensiva va contra todos los asiáticos, sin distinción de la nacionalidad que posean. En definitiva, se trata de una medida de carácter racista. Y otro tanto cabe afirmar de Tanzania, Uganda y Zambia, que se niegan también a recibir a los asiáticos expulsados de Kenya. La actitud de los cuatro países de Africa oriental en este curso es clara y terminante. Cuando el secre-

tario general de la Commonwealth, Arnold Smith, propuso la formación de una Comisión semipermanente que tratase de este asunto: Kenya, Tanzania, Uganda y Zambia boicotearon el proyecto y se negaron a acudir a las reuniones antes de conocer cuál sería la competencia de la citada comisión, porque deseaban obtener seguridades en el sentido de que el Gobierno británico estableciese una delimitación entre el problema de la inmigración y el de los asiáticos que habitaban en Africa, conservando la nacionalidad británica. En el fondo, es posible hablar de un «nuevo racismo», como lo hacía el *Daily Telegraph*, aunque en un sentido distinto al que este diario le atribuye.

Por esto se comprende la postura adoptada por el ministro de Asuntos Exteriores del Pakistán, Hussain, reclamando la firma de una «Carta racial de la Commonwealth», que obligue a todos los países miembros, incluido el Reino Unido, a respetar la residencia de los asiáticos. Pero la oposición suscitada por esta propuesta hizo imposible que fuera considerada. En resumen, el debate sobre la inmigración terminó sin acuerdo. Kenya no modifica su política de expulsiones, la India se niega a admitir a los expulsados—porque, según afirmaba la señora Indira Gandhi, «poseen pasaporte británico y muchos fueron llevados allí como esclavos»—y el Reino Unido se mantiene firme en su decisión de mantener la cuota inmigratoria que fijan las leyes.

El tema de Rhodesia era abordado por la Conferencia en el momento en que la Casa de Rhodesia acababa de izar, en plena City londinense, la bandera rebelde de Ian Smith. En este acto se apoyaba el presidente de Zambia, Kenneth Kaunda, para afirmar: «Si el propio Gobierno de Su Majestad tolera la bandera de los rebeldes en su propia capital, debemos interrogarnos si se toma en serio la rebelión.»

A la vista de los acontecimientos que se han sucedido en estos años, la respuesta, pese a las dudas de Kaunda, es afirmativa. Lo que sucede es que entre el Reino Unido y los países africanos, de los que Zambia es el más exaltado, media una considerable diferencia de criterios acerca de la forma de solucionar el asunto.

En el caso de Rhodesia, tal como se ha demostrado con las resoluciones adoptadas por la O. U. A. y la O. N. U., la mayoría de los países africanos es partidaria de una intervención armada de la Gran Bretaña para poner fin al régimen autoproclamado por Ian Smith. La idea de una invasión de las fuerzas británicas fue lanzada por Kaunda desde los primeros momentos, y el presidente de Zambia ha proseguido—en el segundo día de debates de la Conferencia—la defensa del mismo plan, presentando la solución de la fuerza como

único recurso para derribar el régimen de la minoría blanca. En un discurso de sesenta y cinco minutos exponía sus argumentos y afirmaba que «las propuestas hechas a bordo del *Fearless* en Gibraltar eran peores que las discusiones que tuvieron como escenario el *Tiger*». Es decir, que, en su opinión, Londres va cediendo, gradualmente, respecto a Salisbury. Como confirmación de la disparidad de puntos de vista existente en la Mancomunidad, Malawi —por boca de su presidente, doctor Hastings Kamuzu Banda—rechazaba la sugerencia del envío de tropas británicas a Rhodesia y apoyaba la política mantenida por el Gobierno británico, pidiendo al primer ministro, Harold Wilson, que mantuviera sus presiones sobre Ian Smith para proseguir las negociaciones. Kaunda no cejaba en sus demandas: «¿Por qué se resiste la Gran Bretaña al empleo de la fuerza? Esta ha sido su política en Kenya, Chipre, Guyana e isla Mauricio, recientemente. Y antes en todos sus territorios coloniales. La única solución realista es la fuerza contra Rhodesia: negarla es sepultar a la Commonwealth.»

Harold Wilson, como en el pasado, no se dejaba impresionar por tan patéticos alegatos. En su discurso de cuarenta y dos minutos seguía opinando que la única solución consiste en proseguir las conversaciones con Salisbury hasta llegar a un acuerdo razonable. En una concesión a la galería, reconoció que las últimas propuestas que había presentando a Ian Smith eran excesivas, porque no preveían un Gobierno de la mayoría negra, incumpliendo sus anteriores compromisos basados en el principio N. I. B. M. A. R. (*No Independence Before Majority Rule*). Pero se mantuvo impertérrito en sus decisiones, negándose a retirar las propuestas del *Fearless*, porque, según sus palabras, esto sería dar señal a los extremistas rhodesianos, opuestos a Ian Smith, para endurecer su posición. Descartó totalmente el uso de la fuerza por creer que conduciría, inevitablemente, a un baño de sangre en Africa y que ningún Gobierno británico intentaría tal cosa, y subrayó la necesidad de cumplir exactamente las sanciones decretadas por las Naciones Unidas. El apoyo recibido por el discurso de Trudeau permitió a Wilson remontar la ofensiva de Zambia y Tanzania, logrando reducirla a la petición de que el primer ministro, en sus conversaciones con Ian Smith, tenga presente que la Commonwealth sigue condenando a Rhodesia. Esta petición está muy lejos de las primeras y terminantes pretensiones con que se había iniciado el debate. En definitiva, en el asunto rhodesiano, Londres se considera el único capacitado y responsable para solucionarlo, y esto lo hará en la forma que estime más conveniente, sin

dejarse impresionar por las muestras de desaprobación que puedan elevar los países de la Commonwealth. En el comunicado final queda cautelosamente reflejada esta situación: «la mayor parte de los países estiman que las propuestas del *Fearless* son inaceptables». La mayoría a que se refiere es de 22 de los 28 países.

En cuanto al tema de Nigeria—uno de los más graves y urgentes que se han planteado en el seno de la Commonwealth en su dilatada historia—se albergaba la esperanza de que fuera tratado cuidadosamente y se procediese a la búsqueda de soluciones definitivas. El Gobierno de Lagos se había opuesto a que fuera incluido en la agenda por considerar que se trata de un «asunto interno». «Los asuntos internos de un país no pueden ser incluidos en la agenda», advertía el secretario general, Arnold Smith. «En este caso, comentaremos el viaje del 'Apolo-8'», respondía irónicamente el presidente de Zambia.

A pesar de la rotunda negativa nigeriana, se suponía que llegaría a tratarse el tema—aunque no fuese de forma oficial—bajo la presión de Tanzania y Zambia, que han reconocido a Biafra. Existían indicios de que las delegaciones africanas tratarían, en conversaciones privadas, de establecer las bases para unas negociaciones de paz y que la Conferencia ratificaría el acuerdo a que se llegase. Nada de esto ha sucedido, y la guerra de Biafra—el genocidio del pueblo ibo—prosigue, sin que se advierta ninguna posibilidad de arreglo. El jefe Obafemi Awolowo, delegado nigeriano en la Conferencia, podía declarar que «la guerra sólo terminará cuando Biafra se rinda. Se trata de una disputa entre un grupo de rebeldes y un Gobierno legítimo. Deben rendirse sin condiciones». Lagos, en Londres, no se veía inquietado en lo más mínimo y podía mantener su cerril negativa, rechazando inclusive una sugerencia del primer ministro de Sierra Leona, Stevens, tendente a establecer una comisión que ayudase a obtener una paz negociada. Ni el Gobierno de Lagos tiene interés en mantener unas conversaciones sobre este asunto, ni tampoco el del Reino Unido, que se obstina en seguir suministrando todas las armas que aquél solicite. Se comprende que, mientras estas cosas sucedían en Marlborough House, a la puerta del edificio grupos de manifestantes cantasen: «Ustedes están sentados, sonríen y dicen palabras, mientras millares de niños mueren en Biafra.»

Otra de las cuestiones abordadas ha sido el debate sobre la situación económica mundial. El canciller del Echiquier, Roy Jenkins, pronunció el dis-

curso inaugural, insistiendo sobre la necesidad de mantener la mayor prudencia en el ámbito internacional. Para Jenkins, una nueva conferencia del estilo de la Bretton-Woods no sería susceptible de introducir mejoras en el sistema monetario internacional. El debate fue abierto por el primer ministro de Nueva Zelanda, Keith Holyoake, y se trató de las tarifas preferenciales—nudo gordiano de la Commonwealth—, la situación de la libra esterlina y la ayuda a los países en desarrollo.

Al margen de estos asuntos candentes, el panorama de la Conferencia se veía ensombrecido por varias sensibles muestras de discordia. Chipre constituye un claro ejemplo del progresivo declive de la influencia británica en la Commonwealth. Después de haber votado contra las tesis inglesas sobre Gibraltar, mientras se celebraban las deliberaciones en Marlborough House, llegaban las noticias de nuevas manifestaciones—en Nicosia y otras ciudades—contra la permanencia de bases británicas en la isla, compartiendo la opinión del arzobispo Makarios, presidente chipriota, de que la presencia militar británica en la isla «constituye una permanente amenaza contra la paz», opinión ésta que también ha sido expresada en los últimos debates de las Naciones Unidas por el delegado soviético que protestaba contra el hecho de que existiesen allí bases al «servicio exclusivo de la O. T. A. N.». Es un factor más de desaliento respecto al porvenir de la Comunidad.

Otros dos países que no han quedado satisfechos de esta Conferencia son la Federación de Malasia y el Estado de Singapur. El primer ministro de la Federación, príncipe Abdul Rahman, criticaba duramente a la Gran Bretaña por su decisión de retirar las fuerzas militares «al Este de Suez», inhibiéndose en su papel de protección del Sudeste asiático, lo que ha dejado en Malasia un sentimiento de inquietud al dejarlos a merced de su propia fuerza. Hablando en el banquete de primeros ministros, en el Guild Hall, decía que el sentido de compenetración que había reunido a los dirigentes de la Commonwealth debería tener siempre un profundo sentimiento y que esto «no es fácil de conseguir sin una verdadera dirección y una lealtad mutua y compartida». «Se esperaba—agregó—que el Reino Unido, fundador de la Federación, se haría cargo de la dirección, pero el Gobierno británico piensa ahora de otra manera, y en vez de llevar a cabo su papel de protección, está retirando sus compromisos con los miembros de la Commonwealth.»

Se comprende que, tan pronto terminase la Conferencia, Abdul Rahman marchase a París para entrevistarse con el jefe del Gobierno francés, Couve de

Murville, para exponerle el deseo de adquirir aviones de combate «Mirage» para reforzar sus fuerzas aéreas. Según declaraba el príncipe malasio al término de la entrevista, al disgusto que le producía el verse abandonado por Londres al retirar sus fuerzas militares, se añadía el menosprecio con que el Gabinete de Wilson había acogido sus demandas de que le fueran suministrados aviones. Whitehall se había limitado a contestar, desentendiéndose del asunto, que sólo podía ofrecer «Hawker Hunter» usados, de tipo anticuado y velocidad limitada. «Gran Bretaña no toma muy en serio, en este momento, sus responsabilidades—fue el amargo comentario del tunku en París—. No nos han ofrecido nunca ningún tipo de avión moderno.» Ultimamente, Australia y Nueva Zelanda han anunciado su decisión de mantener tropas en Malasia y Singapur después de la retirada británica reteniendo, estacionadas allí, una fuerza naval y dos escuadrillas de aviación con un total de 42 «Mirage», todo el tiempo que Kuala Lumpur y Singapur consideren necesario. De esta forma ha resuelto la Federación de Malasia la situación creada por la defección británica.

El resumen de la XVII Conferencia, como apuntábamos, ha sido la absoluta esterilidad de los debates, en el interior del magno edificio, y la violencia y el tumulto de las masas, en el exterior. Nigerianos y biafreños libraban batallas violentas en las calles londinenses, y las Casas de Rhodesia y de Sudáfrica eran asaltadas por miembros del «Comité de Solidaridad de Zimbabwe», produciendo daños valorados en 6.000 libras esterlinas. Inoperancia y vandalismo es el desolador balance de esta Conferencia.

JULIO COLA ALBERICH.

CRONOLOGIA

